



Izquierda democrática el difícil camino de la unidad en la diversidad

Edgardo Mocca

**FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG**

ARGENTINA



Izquierda democrática: el difícil camino de la unidad en la diversidad.

por EDGARDO MOCCA.

Impreso en Argentina, 2009.

EDICIÓN:

Fundación Friedrich Ebert en la Argentina.

FUNDACION FRIEDRICH EBERT
Marcelo T de Alvear 883, 4º piso
C1058AAK - Buenos Aires, Argentina.
E-mail: fes.argentina@fes.org.ar
www.fes.org.ar

Los artículos que publicamos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no traducen necesariamente el pensamiento de la Fundación Friedrich Ebert. Se admite la reproducción total o parcial de sus trabajos como asimismo de sus ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar copia a la redacción.

DISEÑO DE PUBLICACIONES:
YUNQUE de Ildefonso Pereyra.
E-mail: yunque@yunque.com.ar
Tel. Fax: 54 11 49576726
Venezuela 3246 - CP1211
Buenos Aires, Argentina.

Las dos almas de la izquierda argentina

7

El reformismo en los años de Menem

9

Crisis y oportunidad

10

La actual dispersión del progresismo

13





Conviene asumir desde el inicio el carácter problemático del objetivo que queremos discutir: cualquiera sea el nombre con que queramos designarlo (“centroizquierda”, “izquierda democrática”, “progresismo”), la existencia, o por lo menos la relevancia de esta referencia ideal de la política aparece amplia y recurrentemente discutida en nuestros días.

En el plano mundial, el desarrollo del proceso de globalización –con el consecuente debilitamiento de los márgenes de acción de los estados nacionales, la erosión de las identidades sociales forjadas en la sociedad industrial, el auge del individualismo y el rol principal de los medios de comunicación en la formación de la agenda pública– dio lugar a la puesta en cuestión de la persistencia de la clásica división entre izquierdas y derechas. Con mucha frecuencia, la negación de la validez de estas coordenadas está asociada a una discusión sobre el lugar de la política en la vida de nuestras sociedades. Una extendida interpretación de la vida social en el mundo global entiende que la política perdió su lugar central en la formación de sentidos públicos y se reduce a ser un “subsistema” más dentro de la compleja red de prácticas en las que transcurren nuestras vidas. La pensadora belga Chantal Mouffe ha situado bajo el nombre de “pospolítica” este vasto círculo de opiniones.

En nuestro país no nos resulta ajena ni extraña esta discusión. Entre actores y analistas de la política nacional circulan con mucho ímpetu los argumentos que tienden a negar la especificidad y la importancia del conflicto político propiamente dicho. En muchos casos se lo reduce a malentendidos o a la simple intención de los políticos de buscar conflictos ajenos a las reales “preocupaciones de la gente”. La ética individual y pública y el saber técnico –particularmente en los asuntos económicos- suelen ser mostrados como los recursos principales del buen gobierno, con abstracción de toda orientación de valores o idea de justicia. Se instala así la supuesta centralidad de la contradicción entre honestos y corruptos o entre los que saben o no saben “gestionar” como la cuestión verdaderamente relevante para la sociedad. El presupuesto no explícito de estas concepciones es una sociedad atomizada de individuos, vacía de intereses sectoriales y de identidades colectivas, una sociedad, en fin, sin actores sociales que construyen y defienden su existencia en el terreno de la política.

Este trabajo tiene una finalidad y un sentido político y no la pretensión de una descripción externa y neutral. La opinión que lo anima es que la discusión sobre la izquierda¹ en la Argentina tiene carnadura real, si se asume esta definición como opción política por la igualdad social y como expresión política de actores sociales interesados por reformas en esa dirección.

Naturalmente, dentro de ese amplio marco conceptual existen necesarias delimitaciones. El sujeto político potencial al que pretendemos remitirnos es de índole democrática: no considera los cursos de acción que impulsa como los únicos posibles; admite la existencia y la legitimidad de los adversarios políticos; en Argentina, como en todo el mundo, existe una derecha cuyo valor central es el de la competencia económica y que considera a las desigualdades que en ese terreno se producen como la base del desarrollo de la personalidad humana. No nos referimos tampoco a una izquierda que concibe su triunfo político como el final de la competencia y la alternancia en el gobierno. Hablamos, por eso, de una izquierda democrática. Al mismo tiempo, y en el mismo sentido, no creemos que el desarrollo de las transformaciones que impulsamos constituya el final del conflicto social y de la historia; para utilizar palabras de Norberto Bobbio, creemos que la historia es un entramado dramático de libertad y opresión, en el que a nuevas conquistas suceden nuevos problemas y demandas y no un camino rectilíneo con un “final” predeterminado. Además de democrática, entonces, la izquierda que planteamos es reformista, lo que significa gradualista y guiada por agendas concretas y no debe ser confundido con moderación: la izquierda reformista es audaz en la radicalidad de sus objetivos.

Otra importante delimitación es la que separa a una concepción de la izquierda reducida a una forma de crítica moral e intelectual de lo existente de la que aspira sistemáticamente a conquistar la voluntad de las mayorías para ejercer el gobierno del Estado. No es un problema menor en un país en el que buena parte de las formaciones políticas de reconocida inspiración de izquierda han tenido enormes dificultades para pesar en la arena electoral. Está claro que la cuestión es la voluntad de ser mayoría y gobernar para hacerlo en función de los valores que fundan la propia identidad y poniendo en práctica programas que encarnen esos valores en las coyunturas concretas. Sin embargo, sabemos que la política, y especialmente la política de gobierno, no es una herramienta

¹ Usaremos las expresiones “izquierda” y “progresismo” de modo indistinto, conscientes de que una discusión sobre un uso adecuado de los términos nos llevaría lejos del objetivo del trabajo.

pasiva y muda que se usa al antojo de quien la ejerce. Actuar en política, lo explicó con crudeza Max Weber, es entenderse con las miserias humanas; es “tratar con los poderes diabólicos que acechan todo poder”. Entre el moralismo impotente y la cínica seducción del poder hay un angosto camino que es el de una política capaz de unir convicciones con responsabilidad por las consecuencias de sus actos.

Es necesario decir que la discusión que estamos haciendo no se remite a ninguno de los sujetos políticos “realmente existentes” en la Argentina, sino que se propone abrir (o tal vez, mejor, reabrir) un debate orientado a la gestación de un nuevo actor político, capaz de encarnar los valores de una izquierda democrática, reformista y con vocación de mayorías y de gobierno. Si la premisa es que esa fuerza política no existe, aparece como necesaria la indagación de sus afluentes potenciales; eso lleva a asumir el carácter políticamente plural y culturalmente diverso del sujeto a construir: si se entendiera la propia identidad, cualquiera fuese, como portadora excluyente, en términos históricos y actuales, de los valores que definen a este sujeto político la discusión quedaría automáticamente clausurada. No se puede pretender, sin embargo, que nadie renuncie a pertenencias o a tradiciones que lo constituyen políticamente; la cuestión es que las identidades políticas históricamente construidas valoricen lo nuevo y no sean justificativos de conductas sectarias o conservadoras. El diálogo entre culturas políticas diversas, y a veces duramente encontradas, es una necesidad específica de la conformación de un sujeto político de la izquierda argentina.

Las dos almas

LAS DOS ALMAS DE LA IZQUIERDA ARGENTINA

de la izquierda argentina

Si tuviéramos que definir el campo potencial de la izquierda reformista argentina habría que admitir su heterogeneidad cultural e ideológica. Una heterogeneidad mayor que la que existe en países como Chile y Uruguay y también que la que caracteriza a las izquierdas de los países europeos; una diversidad que tiene raíces históricas y cuya principal referencia histórica es la emergencia del peronismo a mediados de la década del cuarenta del siglo pasado.

Hasta entonces, la izquierda argentina se expresaba principalmente a través de dos partidos, socialista y comunista, que se reconocían a sí mismos como herederos críticos del liberalismo argentino. En palabras del peruano José Carlos Mariátegui, pensaban que “el destino de todo liberalismo auténtico es preparar el camino al socialismo”. Esa articulación entre liberalismo y socialismo ya había entrado en crisis durante la década del treinta; el triunfo del peronismo y la historia posterior a su derrocamiento en 1955 pondría en escena una articulación alternativa, la del socialismo con el nacionalismo. Excede las pretensiones de este trabajo un análisis de la compleja causalidad y la vastedad de consecuencias ideológicas y culturales que supuso la irrupción del peronismo. Para sus propósitos, es suficiente consignar que la amalgama discursiva y práctica entre avances sociales impulsados desde el Estado, definiciones políticas de corte antiperonista y tensas relaciones con la ideología y las instituciones de la democracia liberal que produjo el movimiento de Perón, dejó

profundas huellas en el perfil político-cultural de la izquierda argentina. Desde entonces el alma “liberal-socialista” convive y lucha con la tradición “nacional-popular”, a partir de relatos alternativos y a veces antagónicos del pasado y de interpretaciones igualmente encontradas sobre el presente.

El peronismo nunca se autodefinió como “de izquierda”. Sin embargo, las reformas impulsadas durante su primer gobierno significaron la definitiva incorporación política de grandes masas trabajadoras, hasta allí excluidas de la escena. Las izquierdas de cuño socialista se situaron, en lo fundamental, en la oposición al gobierno de Perón, sobre la base de denunciar los aspectos corporativos y autoritarios de su régimen político. Después de 1955, la interpretación del movimiento entonces derrocado pasó a ser el punto central de la agenda de discusión política argentina; aun quienes sostenían y auspiciaban la “desperonización” de la sociedad reconocieron que la política argentina no volvería a ser igual a lo que era antes de la experiencia iniciada en 1945 y que los motivos nacional-populares del peronismo no podrían ser excluidos de la escena.

En la propia izquierda socialista hubo un movimiento de revalorización y reapropiación de esos elementos que produjo cambios internos y rupturas en los partidos de esa inspiración. Mientras tanto la cada vez más activa resistencia del peronismo a los regímenes basados en su proscripción creó el ambiente propicio para la radicalización de amplios sectores y –bajo el influjo del clima de época propio de la revolución cubana- desembocó en la constitución de una influyente corriente de izquierda peronista con importantes bases sociales. Las organizaciones armadas que protagonizaron la violencia de los años setenta son, en su diversidad ideológico-política, testimonio de esas transformaciones en la configuración de la izquierda argentina. Desde la emergencia del peronismo, por otro lado, las izquierdas que permanecieron fieles a la inspiración socialista y comunista de sus prácticas no volvieron a alcanzar posiciones decisivas en el movimiento sindical, que se mantuvo en lo fundamental bajo la dirección del peronismo, y sus desempeños electorales no tuvieron gravitación en la escena política nacional. La tajante divisoria de aguas entre peronistas y antiperonistas siguió – y en buena medida sigue- circulando al interior del territorio político de la izquierda.

La realidad política regional muestra que esta doble alma de la izquierda no es un problema específicamente argentino. En el contexto de un avance general de la izquierda, aparece una heterogeneidad marcada entre los procesos que lideran los partidos de raíces socialistas “liberales”, como el Partido Socialista Chileno y los que se desarrollan sobre la base de nuevas configuraciones de tipo nacionalista o indigenista, como el caso de Bolivia. Se necesita un gran esfuerzo intelectual y político para lograr que el diálogo entre esas experiencias enriquezca el acervo común de la izquierda y evitar que esa diversidad sea capitalizada por la derecha para desacreditar a aquellos gobiernos que, impulsados por la gravedad de las crisis nacionales, ejecutan políticas de transformaciones más radicales. Está claro que en la región, la alternativa al rumbo transformador que avanza con distintas variantes, no es una izquierda más “clásica” sino la recuperación de la iniciativa por parte del neoliberalismo.

El reformismo



EL REFORMISMO EN LOS AÑOS DE MENEM

en los años de Menem

El año 1989 es un parteaguas histórico en el mundo y en la vida nacional. Con una llamativa simultaneidad, implosionaba en Europa el mundo del “socialismo real” y estallaba un paradigma socioeconómico en la Argentina. Mientras se derrumbaba el muro de Berlín, el incendio hiperinflacionario cerraba una larga etapa histórica en el país, cuyo comienzo podría fecharse en las décadas del treinta y del cuarenta del siglo pasado, caracterizadas por un desarrollo centrado en el mercado interno y la centralidad del Estado en el arbitraje de la puja distributiva intercorporativa. Fue una simultaneidad muy significativa porque permitió al elenco menemista que asumió en julio de ese año, anclar el más profundo viraje sociocultural en varias décadas en un sentido común que recorría el mundo. La quiebra del comunismo, la crisis de los Estados de bienestar europeo, la emergencia de un mundo globalizado, la nueva centralidad del individuo liberado de los “lastres corporativos”, la competitividad y la inserción mundial como únicos caminos posibles, entre otros tópicos de la época, constituyeron una amalgama argumental capaz de situar a la defensiva a cualquier adversario.

Ninguno de los afluentes centrales de la izquierda argentina saldría indemne de este temporal de época. Los sectores más progresistas del peronismo tenían que dar cuenta del hecho notable de que fuera un gobierno justicialista el que pusiese en marcha un proceso de transformaciones raigales en clave neoconservadora. Menem no les ahorró ningún disgusto: vieron como uno de los jefes del golpe de Estado que derribó al primer gobierno de Perón pasaba a ser un nuevo compañero de ruta del presidente, soportaron la proclamación de las “relaciones carnales” del país con Estados Unidos, en tiempos de la primera invasión al Golfo, y hasta los militares que encabezaron el terrorismo de Estado en nombre de la “Doctrina de Seguridad Nacional” fueron indultados por el gobierno. El lugar de la izquierda no peronista no fue más confortable: con el Muro de Berlín se derrumbaba una mitología cuya fascinación había desbordado notablemente los límites del comunismo prosoviético para constituir un punto de referencia reconocido aun por sus más encendidos críticos.

En los primeros años de la década del noventa, en medio de un clima de desaliento y perplejidad, es cuando nace una de las experiencias más ricas que puedan situarse en el lugar de referencia antecedente de este inexistente, y acaso improbable, sujeto político del reformismo argentino. Y una de las fuerzas impulsoras de esa experiencia, acaso la principal, surgió de una escisión del Partido Justicialista: el llamado “grupo de los ocho” se alejó del justicialismo invocando la necesidad de rescatar al peronismo de lo que interpretaban como la traición de Menem. Esa apelación en clave peronista no sobrevivió demasiado al rotundo fracaso de la corriente en las elecciones parlamentarias de 1991, en las que el menemismo revalidó la primacía electoral obtenida dos años antes con la promesa del “salariazó” y la “revolución productiva”.

En esos años se desarrollaba una crisis importante en el Partido Intransigente: después de su exitosa irrupción en 1983, como expresión progresista de amplios sectores medios urbanos, el partido fun-

dado por Oscar Alende se había orientado a una alianza con el peronismo renovador que encabezaba Cafiero; la derrota del gobernador de la provincia de Buenos Aires ante Menem en la elección interna del peronismo significó un duro golpe para esa organización. El ala progresista del Partido Demócrata Cristiano, encabezada por Carlos Auyero, se desprendía, a su turno, de la organización y formulaba su propia propuesta de alianzas. La experiencia de reagrupamiento del reformismo en la década de los noventa, a la que se sumarían luego las dos alas del socialismo argentino ya en proceso de unidad, es tributaria de esta múltiple crisis.

La historia de lo que se constituyó primero como Frente Grande y luego como Frepaso, con la participación del socialismo y del ex gobernador justicialista José Bordón es suficientemente conocida como para detenernos en ella. Lo que interesa particularmente del ascenso del Frente –tan vertiginoso como su caída con la crisis de la Alianza– es su discurso novedoso en el universo de la izquierda: una convocatoria a construir un progresismo de mayorías y de gobierno, a abandonar el discurso antisistema de las izquierdas de diverso origen para orientarse en la dirección de reformas concretas y viables en un sentido de justicia social y calidad institucional.

La experiencia del Frepaso debe ser recuperada también, a pesar de su desastroso final, en lo que constituyó una experiencia de convivencia política entre cuadros y sectores políticos progresistas de la más diversa inspiración. Fue una comprobación de que las profundas querellas internas entre las fuerzas de izquierda no se resuelven en el debate historiográfico sino en la acción política alrededor de una agenda concreta. Carente de un registro realista de la creciente vulnerabilidad socioeconómica y política de la Argentina en los marcos de la convertibilidad y arrastrado por las demandas estrictamente electorales, el Frepaso concretó una coalición política en la que quedó sumido en la pasividad ante el creciente deterioro nacional. La crisis de la Alianza y el derrumbe del gobierno de De la Rúa en diciembre de 2001 fueron el final lamentable de la experiencia. Una experiencia, de la que de todos modos no se puede prescindir a la hora de pensar el futuro del reformismo en la Argentina.



Crisis ■ CRISIS Y OPORTUNIDAD ■ y oportunidad

El múltiple estallido, económico, social y político, que sucedió al derrumbe de la convertibilidad del peso con el dólar y la quiebra general de los contratos públicos internos y externos clausuró rotundamente una etapa de la vida nacional. No era la crisis de un gobierno: el propio régimen político y hasta la supervivencia de la comunidad política estuvo en entredicho en aquellos días.

Fue un pasaje de extraordinaria activación de la sociedad. La clase política quedó en el centro de un huracán de furia e indignación provenientes de los más diversos sectores sociales y expresadas a través de diferentes formas. A los efectos de este trabajo, tiene especial importancia el clima de ideas que se vivía en aquellos días. La derecha política e intelectual apostó hasta muy entrado el

año 2002 a una deriva caótica de la situación; los pronósticos de una inevitable hiperinflación se mezclaban con el relato escandalizado del escenario de protesta social generalizada. Poco se recuerda hoy que a principios de 2002 tuvo amplia circulación periodística un *paper* que proponía la declaración de quiebra del país y la delegación de las decisiones nacionales a un comité internacional de expertos que administrara la situación.

En la izquierda del espectro político tampoco era un momento demasiado propicio para propuestas sensatas y gradualistas de salida de la crisis. Sin contar con el brusco ascenso a primer plano de los grupos ideológicamente más estancados del espacio –bastante marginales antes del estallido y después de la relativa normalización- existía un ambiente sumamente favorable para los discursos refundacionales, aún en sectores políticos e intelectuales que hasta hacía pocos meses habían participado en el desarrollo de la comentada experiencia reformista. No faltaron quienes plantearan la necesidad de una reforma constitucional cuyo filo principal iba en el sentido de un carácter más “directo” de la democracia; no era claro el diseño de la propuesta, pero el espíritu que la animaba era de rechazo al sistema representativo.

Las posibilidades que en ese contexto podían asignarse a un curso pacífico y relativamente estable de la situación política eran ciertamente escasas. Y desde el punto de vista del signo que pudiera tener la salida de la crisis, eran altas las posibilidades de que fuera conservador y hasta autoritario. Sin embargo quiso la fortuna, no sin el aporte de un importante grado de prudencia por parte de la mayor parte de la dirigencia política, que la crisis asumiera un curso gradualista, más pacífico y civilizado del que podía preverse. En el marco de un grado apreciable de recuperación económica –que empezó por ser considerada por los infalibles economistas como una “meseta” dentro de la crisis- y de una ostensible puja de poder en el Partido Justicialista entre duhaldistas y menemistas, las elecciones de mayo de 2003 dieron nacimiento a una situación que entraña una nueva oportunidad para el reformismo.

Es imposible una apreciación del actual estado de cosas en el mundo de la izquierda o del “progresismo” que esté libre de las profundas huellas sembradas por la escisión histórica entre sus vertientes nacional-populares y socialistas. El grupo político que asume el gobierno en mayo de 2003 tiene la marca evidente de la experiencia política de la izquierda peronista de la década del setenta. Es esa herencia ideológica y política, con los ajustes propios del paso del tiempo y el cambio de las circunstancias, la que se deja ver en sus orientaciones de valor y en sus estilos de gestión. La evaluación que sobre esta experiencia hacen distintas corrientes progresistas va más allá del registro de sus fortalezas y debilidades; está impregnada de una antinomia que la política argentina no ha terminado de superar y que, como dijimos, atraviesa a la propia izquierda.

Kirchner gana la presidencia como uno de los tres candidatos del justicialismo. Su mensaje político inicial y no abandonado hasta hoy es el de la necesidad de construir una herramienta política superadora de los partidos tradicionales y generar una dinámica de competencia entre centroizquierda y centroderecha. Desde las primeras medidas puestas en marcha, el gobierno muestra una manifiesta inclinación reformista y se autoincluye expresamente en la constelación de gobiernos de ese signo nacidos en la región durante los últimos años. No puede ignorarse, sin embargo, que gran parte de su base parlamentaria, los gobernadores que lo apoyan y segmentos significativos de su base social organizada provienen de la misma estructura justicialista que respaldó a Menem.

Es comprensible que esta trama política incida en la política oficial y provoque tensión entre los compromisos de renovación formulados y la permanencia de prácticas tradicionales del peronismo. Para una parte de la dirigencia progresista, no existe tal tensión sino lisa y llanamente un doble discurso presidencial: mientras se emiten mensajes transformadores se perpetúa la "vieja política", lo cual se agrava por las pulsiones "hegemonistas" del gobierno. La discusión es importante más allá del juicio sobre la actual política gubernamental; compromete un diagnóstico del país y una perspectiva para el reformismo en la Argentina.

Es muy característico de amplios sectores de la izquierda, particularmente aunque no sólo en sus componentes no peronistas, pensar la realidad nacional con arreglo a "modelos" previamente elaborados. Así por ejemplo, se usa y abusa de la apelación al modelo chileno, al venezolano o al español para la construcción de una estricta clasificación de orden académico entre gobiernos "socialdemócratas" y gobiernos "populistas", entendido habitualmente este último calificativo como equivalente funcional de prácticas demagógicas y tendencialmente autoritarias.

No se pretende aquí negar la pertinencia y la potencial riqueza de un debate teórico sobre las formas de la democracia y su relación con un proyecto transformador. La intención es poner el acento sobre un rasgo de ciertos argumentos polémicos: la deshistorización del análisis, la prescindencia de la trayectoria política, institucional y social de un país a la hora de juzgar su realidad actual. Para ejemplificar: no es solamente la llamativa personalidad de Chávez la que explica el actual estado de cosas en Venezuela; para acercarse a su comprensión es necesario remitirse a la crisis raigal del sistema de partidos políticos que tuvo vigencia en ese país durante la segunda mitad del siglo XX y al cambio de su configuración social en las últimas décadas. La misma necesidad de referencia histórica del análisis vale para el Chile postpinochetista o para la España salida de la larga tiranía de Franco. Si se ignoran las coordenadas históricas, sociales y culturales, se reduce la política a puro voluntarismo o, lo que es aún peor, a una eterna batalla entre buenos y malos.

El dato central es que Argentina participa, con sus propias características, del proceso de transformaciones políticas y culturales que recorre la región. Ha habido en estos años un innegable replanteo respecto del sentido común predominante en la década del noventa. Las relaciones entre Estado, mercado y actores sociales han adquirido un dinamismo imprevisible en la época de la hegemonía neoliberal. La supuestamente definitiva impotencia de los estados nacionales para intervenir en el funcionamiento del capitalismo global ha dejado su lugar a una visión neodesarrollista que, aun en las condiciones de extraordinaria debilidad de los recursos estatales, procura devolverle a la política su capacidad de intervención en la distribución social de los recursos. El reconocimiento de esta realidad no significa aceptarla sin beneficio de inventario. El país sale de las profundidades de su más grave crisis contemporánea con enormes problemas en los más variados campos, desde el de una economía todavía muy vulnerable a una institucionalidad político-estatal que muestra las huellas del extraordinario vaciamiento de legitimidad política sufrido. Hay una amplia agenda de temas pendientes que conciernen a una propuesta de desarrollo de mediano y largo plazo pendiente de discusión, en la que una confluencia de izquierda democrática podría dar una importante contribución.

La actual

**LA ACTUAL DISPERSION DEL PROGRESISMO**

dispersion del progresismo

La actitud ante el gobierno nacional divide las aguas en el interior de la constelación política de la izquierda reformista. Si tomamos a los cuadros y dirigentes del Frepaso antes de la crisis de la Alianza como puntos de referencia orientadores para hacer un mapa de la actual realidad, tendríamos tres grandes bloques. Una parte de esos dirigentes actúan hoy en el gobierno y forman parte de modo más o menos activo del Frente para la Victoria; otro sector viene actuando en la oposición, particularmente desde el ARI, con posiciones críticas respecto de la orientación que Elisa Carrió impulsa en la Coalición Cívica; y hay un tercer grupo que actúa en gobiernos locales y en el de la provincia de Santa Fe, con posiciones de independencia respecto del gobierno, pero sin situarse en una oposición cerrada.

Esta situación tiene una complejidad que no puede ser resuelta sobre la base de apelaciones voluntaristas que prescindan de la lógica propia de los procesos políticos democráticos en los cuales el calendario electoral interviene decisivamente a la hora de decidir conductas. Dicho de otra manera, es muy difícil concebir unidades políticas que no se expresen, en un período razonable, en propuestas electorales comunes. Esta dificultad, acaso insalvable en el corto plazo, no significa que no puedan ser pensadas formas flexibles y creativas de interacción y discusión político-programática, orientadas a mantener y reforzar vínculos y crear condiciones para formas más orgánicas de coordinación. Para facilitar ese camino sería necesario partir de las diferentes condiciones que crea cada una de las situaciones antes referidas.

Los dirigentes que actúan dentro de la fuerza gubernamental tienen una ventaja en la posibilidad de participar en un proceso de gran riqueza política. Están comprometidos, en general, con la gestión diaria y pueden, en esas condiciones, profundizar en el tipo de decisiones necesarias en la coyuntura política. Se sienten parte de un proceso de cambios y su aporte a ese proceso les abre nuevas perspectivas sobre la realidad del país. Al mismo tiempo, este sector político sufre la ausencia de una personalidad política y un liderazgo propio, en el contexto de un gobierno fuertemente concentrado y personalizado. La etapa actual, en la que se ha colocado en el centro la reorganización del Partido Justicialista, genera la incertidumbre sobre el futuro de la concertación política enunciada desde el kirchnerismo.

Quienes actúan en la oposición cuentan a su favor con el espacio de la crítica a los errores e inconsistencias del gobierno en una situación más difícil para éste desde el punto de vista de una lógica ampliación de las demandas sociales de cada vez más compleja satisfacción. No tienen recortado su accionar por los lógicos compromisos de quien está en el gobierno y tienen un amplio margen de independencia política para su accionar. El gran problema que enfrentan es que la oposición central al actual gobierno tiene como actores principales a sectores privilegiados de la sociedad argentina. Resulta complicado diferenciar en la oposición a quienes la ejercen a partir de propuestas de acción más radicales de quienes, desde la derecha, quieren revertir la situación al clima político

anterior a la crisis. En ese sentido, cuanto más sistemática y total es la oposición más se aproximan políticamente sus actores, como lo demuestran episodios políticos como la crisis entre Colombia y Ecuador y el *lock out* de los productores agrícolas.

El triunfo de la coalición progresista encabezada por el socialismo en Santa Fe es una importante novedad política para la izquierda. Genera la oportunidad de comprobar la diferencia política en la gestión de una de las principales provincias del país. También el triunfo de fuerzas progresistas en un conjunto de intendencias, muy importantes algunas de ellas, permiten desarrollar una experiencia de gobierno local y fortalecer el vínculo de estas fuerzas con la sociedad. Sin embargo, la acumulación de recursos de poder provincial y local no asegura por sí misma proyección nacional; tarde o temprano estos dirigentes y estas fuerzas se encontrarán en la situación de definirse en términos nacionales y conformar alianzas en ese sentido.

El gran desafío para esta vasta constelación política –con sus “almas” históricas y sus encontradas posiciones actuales- es aportar a que no se cristalicen divisiones irreductibles que remiten más al pasado que al horizonte del país actual. Se puede y se debe evitar que la libertad democrática y la calidad institucional se piensen en contradicción con la inclusión social; que la clase media se piense al margen y en contraste con los sectores más postergados de la sociedad; que el progreso económico y social se mida según el bienestar de una parte de las personas. Necesitamos una discusión que parta de la agenda política real y no de los atrincheramientos ideológicos o de la defensa cerril de identidades o estructuras políticas, por legítimas que éstas sean.

Argentina es un país periférico, situado en una región que no ocupa, acaso afortunadamente, el centro de la atención de los actores centrales del mundo globalizado. La manera de movernos en ese mundo aparece como uno de los clivajes centrales de su política. Parece claro que la opción por un proyecto de desarrollo autárquico, cerrado a los flujos internacionales de capital no es viable; la retórica soberanista puede ser operativa a la hora de modificar un sentido común que hacía de la propia vulnerabilidad el argumento para un proyecto de apertura indiscriminada y desigual, pero no es suficiente por sí misma para sostener un modelo de desarrollo.

La globalización ha modificado la escala de las políticas y las regiones pasan a ser un módulo decisivo a la hora de decidir rumbos de desarrollo; el reformismo de estos días no puede prescindir de una hoja de ruta integradora audaz y concreta, centrada en lo productivo y políticamente ambiciosa, con el Mercosur como núcleo central. Desde la región y con la región es posible intervenir activamente en la agenda global; la defensa de la paz, el multilateralismo y condiciones hoy ausentes de equidad en materia de comercio internacional entre el mundo en desarrollo y los países emergentes son objetivos irrenunciables que no pueden dissociarse de los problemas de la seguridad que hoy ocupan la atención de los países centrales. Tal como quedó claramente ilustrado en la reunión del grupo de Río en Santo Domingo que trató el conflicto en la región andina, la doctrina de la guerra preventiva y las facultades para violar las fronteras nacionales en nombre de la lucha contra el terrorismo deben ser enérgicamente repudiadas.

El lugar del Estado es, sin duda, otro de los puntos centrales de la agenda. La interpretación neoliberal del mundo globalizado sentencia la caducidad definitiva del Estado nación, bajo el doble proceso de la mundialización económica y la reivindicación de nuevas atribuciones por los poderes

locales. Sin negar la necesidad de una exploración seria de nuevas instancias de gobierno político de la sociedad, lo cierto es que el Estado-nación sigue siendo la única sede de la ciudadanía política. Si la búsqueda de nuevas respuestas políticas supranacionales a la extrema libertad de movimientos del capital, particularmente el capital financiero, es reemplazada por una vulgata antiestatista de las que predominaron en las últimas décadas, el resultado es un debilitamiento del único terreno en el que florecieron las instituciones democráticas en los últimos doscientos años. Como suele recordar Habermas, no todos los Estados nacionales son democráticos, pero no hay democracia política fuera de los Estados nacionales. Claro que la recuperación del Estado –que es la recuperación de la política– no puede pensarse desde la negación de los cambios civilizatorios de las últimas décadas. La izquierda puede pensar la relación entre Estado, sociedad y mercado en términos pragmáticos que se interroguen sobre los requisitos de una sociedad democrática e igualitaria más que en clave de dogmas y relatos cerrados.

Norberto Bobbio decía que la igualdad es la “estrella polar” de la izquierda. No hay izquierda sin lucha por la igualdad. El punto central de la agenda reformista en la Argentina no puede ser ocupado sino por el problema del enorme deterioro de la trama social argentina, por el hecho de las múltiples fracturas no sólo económicas sino también culturales que atraviesan a nuestro país. Un sector considerable de la izquierda argentina incorporó a su acervo en los años ochenta el reconocimiento de la importancia del Estado de derecho y la república democrática; es un avance al que no debería renunciarse en nombre de ningún aparente atajo político que prometa rápidas reparaciones sociales. Pero la defensa de la democracia no se libra hoy solamente en el terreno del entramado institucional, ciertamente importante. Hoy hay millones de hombres y mujeres excluidos de los circuitos productivos, educativos y culturales; expuestos a la violencia como víctimas y como victimarios. No hay ideario democrático que pueda situarse al margen del hecho de que una gran parte del “demos” carece de las mínimas condiciones para la participación en la decisión sobre los asuntos colectivos. Cuando pensamos en el fortalecimiento institucional estamos pensando, ante todo, en un Estado que esté en condiciones de garantizar ciudadanía a todos los habitantes del país. Que pueda cobrar impuestos con una lógica más progresiva que la actual, combatir prácticas oligopólicas, asegurar educación y salud a todos, velar por la aplicación de las leyes laborales y las que preservan la igualdad de género y los derechos de niños y adolescentes. Que esté, en fin, en condiciones de velar por una convivencia social pacífica y civilizada.

Es un momento muy apropiado para la generación de ámbitos de reflexión comunes para sectores del progresismo que vienen sosteniendo posiciones diferentes ante la coyuntura. Es muy importante que esa reflexión pueda desarrollarse en un diálogo fluido con los protagonistas de otras experiencias nacionales, particularmente de nuestra región. Se puede construir la “hoja de ruta” de un proceso de confluencia, que tenga en cuenta las dificultades reales y los tiempos propios de la política. Más de tres años nos separan de las próximas elecciones nacionales, y el año próximo habrá elecciones legislativas. Es un tiempo de reagrupamientos, de cambios y de tensiones políticas. La salida de la crisis crea nuevas condiciones y nuevos problemas.

El sistema de partidos políticos del país entró en una profunda crisis, como parte del derrumbe generalizado de 2001. Los efectos de esa crisis todavía no han terminado de desplegarse. Contra la mayoría de los pronósticos, las viejas estructuras partidarias no implosionaron, como ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia o Ecuador. La novedad de la situación política que se plasmó en

2003 convive con la permanencia de estructuras políticas que parecían haber colapsado en los días más duros de la crisis de representación política. El grado de continuidad institucional, que es una conquista de la democracia argentina, trajo aparejada la necesidad de esta convivencia entre nuevos fenómenos y viejas formas políticas. Sin embargo, hay espacio para nuevos reagrupamientos; de hecho la derecha político-mediática impulsa una alternativa que, bajo la reivindicación de la "calidad institucional", y apoyándose en errores y dificultades del gobierno, reagrupe a la oposición con el concurso de un sector del peronismo que rechaza el actual rumbo político.

Es lógico que el kirchnerismo aspire a institucionalizar el Partido Justicialista que constituye hoy lo principal de la base de apoyo organizado al actual gobierno en el Congreso y en las provincias. Pero será muy difícil que con ese solo respaldo pueda generarse, además de gobernabilidad, el grado de apoyo y entusiasmo que demanda una agenda de transformaciones como la emprendida. Las fuerzas progresistas que no están ni se proponen estar en el justicialismo deben proponerse alcanzar un nivel de interlocución inteligente e independiente con el gobierno; un diálogo que exprese compromiso general y disposición a la unidad, desde una personalidad política e iniciativas propias. El calendario electoral puede ser visto también como una oportunidad. En 2009 no está en juego la presidencia y es, por eso, una ocasión para producir experiencias de reagrupamiento progresista amplio en un conjunto de distritos y para consagrar nuevos liderazgos con proyección nacional, sobre la base de un amplio arco de alianzas políticas. De manera que junto a una reflexión estratégica común es posible desarrollar una práctica política que facilite y acorte los tiempos de la confluencia. Una vez más hay que decir que el nivel de amplitud y generosidad necesario para avanzar es superior al que ha caracterizado nuestra historia.